



Radicado: 11001-03-15-000-2021-00576-00
Demandante: Jhon Jair Segura Toloza

**CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA**

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-00576-00
Demandante: JHON JAIR SEGURA TOLOZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial

AUTO ADMISORIO CON NEGATIVA DE MEDIDA PROVISIONAL Y PRÁCTICA DE PRUEBA

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado 8 de febrero de 2021 al correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación, el señor Jhon Jair Segura Toloza, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que sean protegidos sus derechos fundamentales *de acceso a la administración de justicia, a la vida e integridad*.

2. El accionante consideró vulnerada dicha garantía constitucional con ocasión de la providencia del 18 de enero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó *“el medio de control de cumplimiento, presentado por el señor John Jair Segura Toloza”*. Lo anterior, en el trámite de la acción de cumplimiento con radicado N° 76-001-23-33-000-2020-01489-00, instaurada contra la Unidad Nacional de Protección.

1.2. Solicitud para ser resuelta en la sentencia que decida la acción

3. La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, como consecuencia, pidió:

“(…) revocar todo lo actuado por la demandada por evidenciarse que dicho pronunciamiento viola la norma señaladas (sic) en primer lugar la unidad nacional de protección no le dio trámite legal a mi petición y por la misma razones dio lugar al SILENCIO ADMINISTRATIVO.” (sic para toda la cita)





1.3. Solicitud de medida provisional

“Sírvasse usted honorable magistrado dejar sin efecto la decisión de los demandados como MEDIDA PROVISIONAL”.

1.4. Solicitud de práctica de prueba

4. Aunado a lo anterior, en el acápite de pruebas del escrito de tutela, el accionante se limitó a indicar lo siguiente:

“(…) Solicítese a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN que ayunque (sic) a su despacho la resolución del comité CERREM en la cual resolvió la petición elevada por el hoy accionante la misma que declaró el silencio por falta de competencia”

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

5. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Jhon Jair Segura Toloza, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37¹ del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1² del Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017, el artículo 2.2.3.1.2.4³ del Decreto 1069 de 2015 también modificado por el Decreto 1983 de 2017.

6. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, por tanto, debe aplicarse el numeral 5° de la referida norma.

7. Igualmente, este Despacho como integrante de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, es competente para

¹ “ARTÍCULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”.

² “ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(…)

7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

³ ARTÍCULO 2.2.3.1.2.4. Los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento de la impugnación de fallos de acción de tutela sean resueltos por salas de decisión, secciones o subsecciones conformadas para tal fin. Así mismo determinara la conformación de salas de decisión, secciones o subsecciones para el conocimiento de las acciones de tutela que se ejerzan contra actuaciones de la propia corporación, a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del presente decreto.

pronunciarse sobre la admisión de la demanda de tutela, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35⁴ del Código General del Proceso, aplicable al trámite del vocativo de la referencia por la remisión establecida en el artículo 2.2.3.1.1.3.⁵ del Decreto 1069 de 2015.

2.2. Cuestión previa

8. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI⁶, lo que ha permitido que las funciones del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Respecto a la solicitud de medida provisional

9. Revisado el expediente, se observa que el señor Jhon Jair Segura Toloza solicitó como medida de suspensión provisional que se le ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca “*dejar sin efecto la decisión de los demandados como MEDIDA PROVISIONAL*”, sin dar ninguna explicación adicional que sustentara dicha petición, ni individualizar la actuación cuya suspensión solicita.

⁴ “ARTÍCULO 35. ATRIBUCIONES DE LAS SALAS DE DECISIÓN Y DEL MAGISTRADO SUSTANCIADOR. Corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión.

Los autos que resuelvan apelaciones, dictados por la sala o por el magistrado sustanciador, no admiten recurso.

A solicitud del magistrado sustanciador, la sala plena especializada o única podrá decidir los recursos de apelación interpuestos contra autos o sentencias, cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o establecer un precedente judicial”.

⁵ “ARTÍCULO 2.2.3.1.1.3 De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto.

Cuando el juez considere necesario oír a aquél contra quien se haya hecho la solicitud de tutela, y dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley rinde declaración por medio de certificación jurada, el juez solicitará la respectiva certificación”.

⁶ “SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su inicio hasta su terminación; la incorporación de los antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y brinda un tablero de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y el sistema de relatoría (...)”

10. El artículo 7° del Decreto Ley 2591 de 1991 señala que, desde el momento de la presentación de la solicitud, el Juez que conoce de la acción de tutela, si expresamente lo considera necesario y urgente para proteger derechos fundamentales, puede suspender la actuación en concreto que, a juicio de la parte actora ocasiona la vulneración del derecho fundamental invocado. Así mismo, debe apreciarse fácilmente que existe una amenaza o vulneración de un derecho fundamental en razón a ella y, además, se debe advertir serias posibilidades de que finalmente se acceda a la protección constitucional solicitada.

11. No obstante lo anterior, al aplicar estos presupuestos jurídicos al caso concreto, con fundamento en los medios de convicción que se aportaron por la parte accionante con el escrito tutelar y ante la ausencia de argumentos que justifiquen el decreto de la medida provisional, el Despacho advierte que ésta no resulta necesaria ni urgente para garantizar el objeto del proceso y el derecho fundamental que subyace en el mismo, toda vez que no se encuentra acreditada, hasta este momento procesal, una situación de vulneración o indefensión que constituya un perjuicio irremediable o un peligro inminente para la parte actora.

12. Lo anterior en cuanto, *prima facie*, se observa que:

i) Con la decisión judicial demandada no se advierte *prima facie* un error manifiesto que contradiga el orden jurídico.

ii) No existe una evidente amenaza o vulneración que se materialice en contra de los derechos fundamentales de la parte actora, hasta este momento procesal, no aparecen manifiestos los defectos argüidos por el actor y que atenten contra la razonabilidad de la providencia atacada, pues ésta fue producto de una decisión adoptada en el trámite de una acción de cumplimiento, en la que se consideró que, del análisis de los artículos 84 y 85 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se desprendía una obligación legal, expresa, clara y exigible para la administración que pudiera ser ordenada por dicho medio. Agregó que, **la acción de cumplimiento es eminentemente residual, por lo que el actor cuenta con el medio control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la falta de respuesta de la administración.**

iii) No se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional ya que si bien el referido medio de control, de conformidad con el artículo 87 de la Constitución Política, fue instituido con la finalidad de que cualquier persona pueda hacer efectivo el cumplimiento del deber que surge de una ley o un acto administrativo, lo cierto es que de

conformidad con el artículo 9° Ley 393 de 1997⁷ la misma no es procedente “cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial...”

13. En virtud de lo expuesto y al no contar este Juez Constitucional con algún medio de convicción que le permita establecer una relación de causalidad entre los argumentos traídos en la presente demanda y la supuesta vulneración irreparable de los derechos alegados por la parte actora, se abstendrá el Despacho de decretar la medida provisional solicitada.

2.3.2. Respecto a la solicitud de práctica de prueba

14. La parte actora, en su escrito de tutela, únicamente indicó: “(...) Solicítese a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN que ayunque (sic) a su despacho la resolución del comité CERREM en la cual resolvió la petición elevada por el hoy accionante la misma que declaró el silencio por falta de competencia”

15. En virtud del artículo 29 de la Constitución Nacional, se consagra el derecho al debido proceso como uno de los pilares fundamentales de la administración de justicia y en él se contempla a su vez el principio de contradicción y defensa presente en todo proceso judicial. De otra parte, dicha garantía involucra una serie de principios rectores entre los que se encuentra la celeridad, oportunidad y publicidad, entre otros, que han de regir en los procesos constitucionales.

16. Los autores modernos del derecho probatorio resaltan que la finalidad más importante que debe caracterizar la actividad probatoria “es llevar probanzas que presten algún servicio en el proceso para la convicción del juez”⁸, razón por la cual, si una prueba que se pretende aducir no cumple con dicho requisito, debe ser rechazada de plano. Lo anterior encuentra sustento normativo en la acción de tutela en los artículos 169 y 168 del Código General del Proceso, aplicables al caso por remisión expresa del artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, que establecen que: i) **el juez podrá rechazar, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles** y ii) **las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes.**

17. Frente a las características de la prueba, el Consejo de Estado – Sección Cuarta señaló lo siguiente:

“La **conducencia** consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La **pertinencia**, por su parte, se

⁷ “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.”

⁸ Manual de Derecho Probatorio, Jairo Parra Quijano, Pg. 156.

fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso”⁹.

18. Aunado a lo anterior, quien solicite al juez el decreto de una prueba debe cumplir con una carga argumentativa mínima con la que: *i)* sustente los supuestos fácticos concretos que pretende acreditar a través de los elementos de convicción cuyo decreto pretende del juez constitucional, los que necesariamente deben tener relación con las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial alegadas que delimitan el objeto de examen que el juez de tutela puede realizar en esta sede; y *ii)* las razones por las cuales considera que los que solicitó cumplen con los presupuestos de conducencia, pertinencia y utilidad para llevar al juez al convencimiento de que los hechos que relata son ciertos y acreditar los defectos de los que –a su juicio– adolecen las decisiones.

19. En atención a lo señalado, el Despacho negará la práctica de la prueba solicitada, toda vez que la parte accionante no expuso ningún argumento que sustente que el referido medio de prueba cumple con los presupuestos de conducencia, pertinencia y utilidad que permitieran constatar la necesidad e incidencia de la misma para proferir la decisión que en derecho corresponda.

2.4. Admisión de la demanda

20. Por reunir los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto Ley 2591 de 1991 y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 del 2017 se dispone:

PRIMERO: ADMITIR la demanda incoada por el señor Jhon Jair Segura Toloza, en ejercicio de la acción de tutela.

SEGUNDO: NEGAR el decreto de la prueba solicitada por la parte accionante, por las razones expuestas.

TERCERO: NEGAR la medida provisional prevista en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991 solicitada por la parte actora, de conformidad con lo expuesto.

CUARTO: NOTIFICAR de la existencia de la presente acción a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como autoridad judicial accionada, para que dentro del término de tres (3) días, contados a partir de la fecha de su recibo, se refieran a sus fundamentos y puedan allegar las pruebas y rendir los informes que consideren pertinentes.

⁹ Consejo de Estado – Sección Cuarta. Providencia del 19.08.2010, radicación No. 25001-23-27-000-2007-00105-02.



CUARTO: VINCULAR en calidad de terceros con interés jurídico legítimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la Unidad Nacional de Protección, sujeto procesal que fungió como parte pasiva en la acción de cumplimiento. Lo anterior, para que, si lo considera pertinente, en el término de tres (3) días, contados a partir de la fecha de su recibo, puedan intervenir en la actuación, por cuanto existe la posibilidad de resultar afectados con la decisión que se adopte.

CUARTO: OFICIAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que allegue copia íntegra digital del expediente de la acción de cumplimiento con radicado N° 76-001-23-33-000-2020-01489-00, dentro del término de dos (2) días, contados a partir de la fecha de notificación del presente auto.

ADVERTIR que, de no cumplirse con el requerimiento, se utilizarán por este despacho las potestades correccionales que le confiere el artículo 44 de la Ley 1564 de 2012.

QUINTO: OFICIAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que publiquen en su respectiva página *web* copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y de esta providencia, con el fin de que cualquier persona que tenga interés conozca de los referidos documentos y pueda intervenir en el trámite constitucional de la referencia.

SEXTO: TENER como pruebas, con el valor legal que les corresponda, los documentos relacionados y allegados con la demanda.

SÉPTIMO: NOTIFICAR a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos y para los efectos previstos en el artículo 610 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada